



**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
CORPOURABA**

Resolución

Por la cual se decide una investigación administrativa sancionatoria y se adoptan otras disposiciones.

La Directora General de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA "CORPOURABA", en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por los numerales 2 y 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, el Acuerdo N° 100-02-02-01-016 del 29 de octubre de 2019, en concordancia con el Decreto 1076 de 2015, y,

I. COMPETENCIA

La Constitución Política de 1991 en su artículo 4 inciso segundo indica que: "Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades".

En el artículo 79 que señala que "es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines" y en su artículo 80 consagra que:

*"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, **deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.** Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas."* (La negrilla es propia).

Que la ley 99 de 1993 consagra en su artículo 31 las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible destacándose la siguiente Numeral 2" *Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente."*

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio de Ambiente y se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA, se transforma la Corporación Autónoma Regional del Urabá en la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá-CORPOURABA, cuyas competencias entre otras, es la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente de la región del Urabá.

Que, para la protección y conservación del medio ambiente en Colombia, se estableció el procedimiento sancionatorio ambiental por medio de la expedición de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009.

Que el artículo 1 y 2 de la Ley 1333 de 2009 establecen la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental, manifestando que le corresponde ejercer esta potestad a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, entre otras entidades.

II. HECHOS.



Por la cual se decide una investigación administrativa sancionatoria y se adoptan otras disposiciones.

Que en los archivos de la Corporación se encuentra radicado el expediente **200-165128-0082-2020**, donde obran el Auto N° 200-03-50-06-0222-2020, por medio del cual se legalizó medida preventiva consistente en la aprehensión de material forestal por carecer de documentación que amparara su legalidad. Siendo así procedente abrir investigación sancionatoria ambiental de que trata el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 contra los señores **ROBINSON DE JESUS GIL**, identificado con cedula de ciudadanía N° 8.435.219 y **JUAN VIARNEYS ACOSTA PADILLA**, identificado con cédula de ciudadanía N° 8.439.077, tal como consta en el Auto N° 200-03-50-04-0250-2020.

Una vez ejecutoriado el acto administrativo que dio inicio a esta investigación, este despacho procedió a formular pliego de cargos mediante Auto N° 200-03-50-05-0075-2021, otorgándoles a los presuntos infractores el término de diez (10) días para que presentaran descargo y solicitaran la práctica de prueba que consideraran pertinente y conducente. Etapa procesal no ejecuta por los señores **ROBINSON DE JESUS GIL**, identificado con cedula de ciudadanía N° 8.435.219 y **JUAN VIARNEYS ACOSTA PADILLA**. Amén de ello, esta Corporación garantizó el derecho fundamental al debido proceso, y hacer efectivos los derechos de defensa y contradicción.

Con el objeto de dar continuidad al procedimiento, se remitió el expediente a la Subdirección de Gestión y Administración Ambiental de la Corporación, para que se sirviera realizar informe técnico de criterios conforme al artículo 2.2.10.1.1.3¹ del Decreto 1076 de 2015, tal como se determinó en el informe técnico N° 400-08-01-02-1077 del 10 de junio de 2021, puesto en conocimiento a los imputados por medio del Auto N° 200-03-50-03-0453-2021, por medio del cual se otorgó valor probatorio a las diligencias administrativas obrantes en el expediente N° 200-165128-0082-2020 y se corrió traslado para que presentaran sus alegatos de conclusión.

III.FUNDAMENTO JURÍDICO

Que la ley 1333 del 21 de julio de 2009 “por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, señala en su artículo tercero lo siguiente: “principios rectores. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la ley 99 de 1993.”

Artículo 5°. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se

¹ **ARTÍCULO 2.2.10.1.1.3. Motivación del proceso de individualización de la sanción.** Todo acto administrativo que imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los grados de afectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor, de forma que pueda determinarse la debida aplicación de los criterios a que se refiere el presente reglamento.

Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe técnico deberá indicar las características del daño causado por la infracción.

Resolución

3

Por la cual se decide una investigación administrativa sancionatoria y se adoptan otras disposiciones.

configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.

Parágrafo 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.

Parágrafo 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión.

Artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:

...

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.

Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.

Que el **DECRETO 1076 DE 2015**, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, dispone:

ARTÍCULO 2.2.10.1.1.3. Motivación del proceso de individualización de la sanción. Todo acto administrativo que imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los grados de afectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor, de forma que pueda determinarse la debida aplicación de los criterios a que se refiere el presente reglamento.

Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe técnico deberá indicar las características del daño causado por la infracción.

ARTÍCULO 2.2.10.1.2.5. Decomiso definitivo de especímenes de especies silvestres, exóticas, productos y subproductos de la fauna y la flora, elementos, medios o implementos utilizados para cometer infracciones ambientales. El decomiso definitivo de especímenes de especies silvestres, exóticas, productos y subproductos de la fauna y la flora, elementos, medios o implementos utilizados para cometer infracciones ambientales, se impondrá como sanción por parte de las autoridades ambientales, de acuerdo con los siguientes criterios:

- a) Los especímenes se hayan obtenido, se estén movilizando, o transformando y/o comercializando sin las autorizaciones ambientales requeridas por la ley o los reglamentos;



IV. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Por la cual se decide una investigación administrativa sancionatoria y se adoptan otras disposiciones.

Que el procedimiento sancionatorio ambiental iniciado mediante Auto N° 200-03-50-04-0250-2020, contra los señores **ROBINSON DE JESUS GIL**, identificado con cedula de ciudadanía N° 8.435.219 y **JUAN VIARNEYS ACOSTA PADILLA**, identificado con cédula de ciudadanía N° 8.439.077, se adelantó por movilizar material forestal sin el respectivo salvoconducto actuando así en contravía a lo dispuesto en los artículos 223 y 224 del Decreto Ley 2811 de 1974 y los artículos 2.2.1.1.3.1, 2.2.1.1.4.2., 2.2.1.1.13.1, del Decreto 1076 de 2015.

Que en ese sentido, se advierte que en el presente caso no se cumplieron las normas sobre el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, al aprovechar y movilizar productos forestales sin la respectiva autorización y salvoconducto, que otorga la Autoridad Ambiental competente, que para el caso en particular es CORPOURABA.

Así las cosas, este Despacho evidencia la presencia de culpa por parte de los presuntos infractores, en atención a que no reposan argumentos de defensa que desvirtúe los hechos que motivaron esta investigación administrativa, conforme a lo obrante en el presente expediente se encuentra material probatorio suficiente para determinar la responsabilidad.

Que vale la pena traer a colación lo consignado en el artículo 107 de la Ley 99 de 1993, cuando establece "*Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares.*"

Que es preciso señalar que uno de los límites inmersos a la facultad sancionatoria ambiental, lo constituye la garantía de la legalidad, la cual opera tanto respecto a la determinación en la Ley de las conductas prohibidas y el desconocimiento de las obligaciones establecidas en las normas ambientales, como con relación a las consecuencias jurídicas que de ellas se derivan, es decir las sanciones, lo que conlleva entre otras cosas, a la prohibición para la administración de tipificar por su propia cuenta y riesgo, las infracciones ambientales.

Que en consideración a los preceptos Constitucionales y Legales esta Entidad ha dado cabal cumplimiento al debido proceso dentro del procedimiento sancionatorio iniciado y las decisiones tomadas tienen su fundamento legal, habiéndose cumplido los procedimientos legales establecidos en la Ley 1333 de 2009 y en las demás normas aplicables al caso, preservando las garantías que protegen, en este asunto, a los señores **ROBINSON DE JESUS GIL**, identificado con cedula de ciudadanía N° 8.435.219 y **JUAN VIARNEYS ACOSTA PADILLA**, identificado con cédula de ciudadanía N° 8.439.077.

Que en este orden de ideas, ésta entidad apoyada en los fundamentos técnicos y jurídicos del caso, y una vez observado con plenitud las formas propias del procedimiento administrativo sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 2009, y siendo la oportunidad procesal para calificar la falta realizada por los señores **ROBINSON DE JESUS GIL**, identificado con cedula de ciudadanía N° 8.435.219 y **JUAN VIARNEYS ACOSTA PADILLA**, identificado con cédula de ciudadanía N° 8.439.077; al no haberse desvirtuado la presunción de culpa o dolo, procederá a declararlos responsables de los cargos formulados en los Artículos primero y segundo del Auto N° 200-03-50-05-0075-2021, por movilizar y aprovechar 10.207 m³ de la especie higuierón (*Ficus glabarata kunth*), 3.101 m³ de la especie tachuelo (*Zanthoxylum rhoifolium*) y 1.092 m³ de la especie Guino (*carapa guianensis aubl*).

Que como quiera que se debe guardar sujeción estricta al principio de legalidad, en materia de determinación de sanciones, en la medida que la administración sólo está facultada para

Resolución

5

Por la cual se decide una investigación administrativa sancionatoria y se adoptan otras disposiciones.

imponer las que el ordenamiento jurídico prevé en norma estricta, expresa, cierta y determinada, hemos de recurrir al artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, el cual consagra taxativamente las sanciones para aquellos que han profanado la normatividad ambiental, para esta situación es jurídicamente viable decretar el decomiso definitivo de los productos forestales.

Que finalmente, sustentado en el Decreto 1076 de 2015, el cual establece los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se procederá a imponer la sanción de **APREHENSIÓN DEFINITIVA** de 10.207 m³ de la especie higuierón (*Ficus glabarata kunth*), 3.101 m³ de la especie tachuelo (*Zanthoxylum rhoifolium*) y 1.092 m³ de la especie Guino (*carapa guianensis aubl*).

Por otra parte, acogiendo lo establecido en el parágrafo del artículo 2.2.9.12.1.4² del Decreto 1076 del 2015, este despacho realizara el cobro de la tasa compensatoria, correspondiente a **un millón doscientos sesenta y cinco mil doscientos cincuenta y nueve pesos (\$1.265.259)**, al señor **JUAN VIARNEYS ACOSTA PADILLA**, identificado con cédula de ciudadanía N° 8.439.077, tal como se liquidó en el informe técnico N° 400-08-01-02-1077-2021, emitido por la Subdirección de Gestión y Administración Ambiental de CORPOURABA.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

V.DISPONE

PRIMERO. DECLARAR RESPONSABLE a los señores **ROBINSON DE JESUS GIL**, identificado con cedula de ciudadanía N° 8.435.219 y **JUAN VIARNEYS ACOSTA PADILLA**, identificado con cédula de ciudadanía N° 8.439.077, de los cargos formulados en los Artículos primero y segundo del Auto N° 200-03-50-05-0075-2021, consisten en la movilización y aprovechamiento de 10.207 m³ de la especie higuierón (*Ficus glabarata kunth*), 3.101 m³ de la especie tachuelo (*Zanthoxylum rhoifolium*) y 1.092 m³ de la especie Guino (*carapa guianensis aubl*), sin la respectiva autorización de aprovechamiento forestal y salvoconducto único nacional en línea-SUNL.

SEGUNDO. Sancionar a los señores **ROBINSON DE JESUS GIL**, identificado con cedula de ciudadanía N° 8.435.219 y **JUAN VIARNEYS ACOSTA PADILLA**, identificado con cédula de ciudadanía N° 8.439.077, con la **APREHENSIÓN DEFINITIVA** de 10.207 m³ de la especie higuierón (*Ficus glabarata kunth*), 3.101 m³ de la especie tachuelo (*Zanthoxylum rhoifolium*) y 1.092 m³ de la especie Guino (*carapa guianensis aubl*), por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO PRIMERO. En consecuencia, el material forestal Decomisado Definitivamente, queda bajo la custodia de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá (CORPOURABA) identificada con NIT 890.907.748-3.

² **ARTÍCULO 2.2.9.12.1.4. Sujeto Pasivo.** Están obligados al pago de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable los titulares del aprovechamiento forestal maderable que realicen la tala de árboles para obtener el recurso maderable en bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público y privado.

PARÁGRAFO. La Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable será cobrada incluso a aquellas personas naturales o jurídicas que adelanten la tala de árboles sin los respectivos permisos o autorizaciones ambientales, sin perjuicio de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar.



Por la cual se decide una investigación administrativa sancionatoria y se adoptan otras disposiciones.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Levantar el cargo de secuestre depositario a la señora Gloria De Los Ángeles Lezcano C, identificada con cédula de ciudadanía N° 21.744.068. Así mismo comunicar el contenido del presente acto administrativo para su conocimiento.

TERCERO. Levantar la medida preventiva impuesta en el Artículo primero del Auto 200-03-50-06-0222-2020, en cuanto a la Aprehensión Preventiva de 10.207 m³ de la especie higuerón (*Ficus glabarata kunth*), 3.101 m³ de la especie tachuelo (*Zanthoxylum rhoifolium*) y 1.092 m³ de la especie Guino (*carapa guianensis aubl*).

CUARTO. Reportar en el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA-, la sanción administrativa ambiental impuesta en la presente decisión, una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo.

QUINTO. Requerir al señor **JUAN VIARNEYS ACOSTA PADILLA**, identificado con cédula de ciudadanía N° 8.439.077, para que sirvan realizar el pago de la tasa compensatoria, correspondiente a: **un millón doscientos sesenta y cinco mil doscientos cincuenta y nueve pesos (\$1.265.259) M.L.**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este Acto Administrativo.

Parágrafo 1. Remitir la presente actuación una vez se encuentre ejecutoriada, a la Subdirección Administrativa y Financiera de CORPOURABA, para efectos de expedir la factura correspondiente al valor de que trata el presente artículo.

Parágrafo 2. De conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merito ejecutivo; en caso de renuncia al pago por el infractor, su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva.

SEXTO. Un extracto de la presente providencia que permita identificar su objeto, se publicará en el boletín oficial de la Corporación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la ley 99 de 1993.

SÉPTIMO. Remitir copia de la presente decisión una vez se encuentre en firme a la Subdirección Administrativa y Financiera-área de Contabilidad y Almacén de la Corporación, para los fines de su competencia.

OCTAVO. Remitir copia de la presente actuación administrativa a la Procuradora Judicial Ambiental y Agraria de Antioquia, en cumplimiento de lo establecido en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

NOVENO. Notificar el presente acto administrativo a los señores **ROBINSON DE JESUS GIL**, identificado con cedula de ciudadanía N° 8.435.219 y **JUAN VIARNEYS ACOSTA PADILLA**, identificado con cédula de ciudadanía N° 8.439.077, Acorde con los lineamientos establecidos en el Decreto 491-2020.

DECIMO. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la **Dirección General** de la Corporación, el cual deberá enviarse al correo electrónico atencionalusuario@corpouraba.gov.coo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de conformidad con lo expuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, concordante con el artículo 74 ibidem

Resolución



7

Por la cual se decide una investigación administrativa sancionatoria y se adoptan otras disposiciones.

DECIMO PRIMERO. De la firmeza. La presente providencia rige a partir de su fecha de ejecutoria.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


VANESSA PAREDES ZUÑIGA
Directora General

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Julieth Molina		12/05/2022
Revisó:	Manuel Ignacio Arango Sepúlveda		13-05-2022
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Exp: 200-165128-0082-2020